

Del paro a la mesa y de la mesa al paro

El Ejecutivo Nacional frente al movimiento campesino

Por: Ana María Restrepo Rodríguez*

Mientras el Gobierno apaga incendios, las organizaciones campesinas se legitiman y fortalecen. Balance de las relaciones Ejecutivo Nacional–Campesinado en el 2014.



El movimiento campesino en Colombia ganó protagonismo en 2013 y asimismo sus demandas por una política agraria concertada e integral.

El Gobierno no cumple. Es verdad. El número de protestas motivadas por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional va en aumento en los últimos años. Aunque no es un secreto que el Ejecutivo Nacional no se lleva bien con las organizaciones sociales, vale la pena revisar cómo estuvieron sus relaciones con el movimiento campesino durante el año 2014; esta mirada es importante porque el campesinado ha ganado peso como actor político luego de las protestas del

año 2013. El presente análisis permitirá identificar avances, pasos en falso y perspectivas, no sólo para las organizaciones campesinas, sino también para otros procesos de movilización del país.

Un pequeño ejercicio de memoria

En el año 2013 comenzó un nuevo ciclo para el movimiento campesino en el país: el que por mucho tiempo fue el principal motivo de movilización campesina, la defensa del derecho a la vida,

a la integridad y a la libertad, dio paso a la exigencia de una política agraria concertada e integral, que en primer lugar solucionara lo urgente: los problemas relacionados con la producción y venta de las cosechas. Esto en un contexto en que se empezaban a sufrir los efectos de los tratados de libre comercio y emergían liderazgos políticos campesinos.

Los hitos del año 2013 (sin desconocer las otras protestas que tuvieron lugar durante el periodo)¹ fueron la larga resistencia civil en la región del Catatumbo, el paro cafetero del mes de abril que fue el germen del Paro Agrario del mes de agosto y la movilización de los campesinos del área de influencia de la construcción del megaproyecto Hidroituango que se concentraron durante ocho meses en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. La conclusión del balance del 2013 era que las ganancias en visibilidad y densidad del movimiento repercutieron en el reconocimiento de las organizaciones campesinas como un sujeto político nacional.

“

El número de protestas motivadas por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional va en aumento en los últimos años.

”



Durante las protestas las organizaciones campesinas fueron víctimas de la judicialización de líderes y la represión. Continúa la criminalización de la protesta.

La movilización en 2014²

Las protestas dirigidas contra el Ejecutivo Nacional se iniciaron en 2014 con el cierre de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular: campesinos de todo el país marcharon en Bogotá para presentar el pliego de peticiones resultado de la Cumbre que, entre otros temas, incluyó los referidos a los Tratados de Libre Comercio (TLC), la política de tierras, la participación en los acuerdos de negociación con las FARC-EP, la minería, la relación campo-ciudad y las políticas para la protección de la producción. Así mismo, anunciaron que saldrían a paro nuevamente si no se empezaban a ver resultados en los compromisos del Gobierno.

Y así fue, el 28 de abril, con bloqueos de vías en todo el país, los agricultores manifestaron que el Gobierno Nacional había implementado medidas sobre precios de fertilizantes e insumos, subsidios y apoyo a la producción sólo con el fin de evitar este nuevo paro, pero estos eran paliativos que no solucionaban las crisis estructurales de la producción agrícola. Este paro duró hasta el 9 de mayo, día en que el Gobierno se comprometió a crear la Mesa Única de Participación Agraria como espacio de interlocución entre la Cumbre y el Gobierno y el di-

seño del Fondo de Economía Campesina. Del acuerdo no hicieron parte las Dignidades Agropecuarias con las que posteriormente se instaló otra mesa de negociación.

“

La conclusión del balance del 2013 era que las ganancias en visibilidad y densidad del movimiento repercutieron en el reconocimiento de las organizaciones campesinas como un sujeto político nacional.

”

En agosto, un año después del proceso de resistencia civil en la región del Catatumbo, los campesinos de 59 veredas de los municipios de Teorama y San Calixto (municipios de la región del Catatumbo y activos durante la movilización del 2013) se declararon en Zona de Reserva Campesina (ZRC) de hecho, para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos el reconocimiento de la ZRC del Catatumbo, garantías en materia de seguridad y proyectos que impulsaran la economía y productividad del campo. Así mismo, continuaron exigiendo soluciones para la crisis humanitaria que viven por el fuego cruzado de los combates de la Fuerza de Tarea Vulcano con la insurgencia. En abril se había retomado la mesa de negociación entre el Gobierno y la Asociación Campe-

sina del Catatumbo (Ascamcat), pero fue más bien una pura formalidad. Valga anotar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 no hay una sola mención al tema de las Zonas de Reserva Campesina.

Entre los meses de julio y septiembre, los habitantes de 56 veredas del corredor Puerto Vega-Teteyé (Putumayo), área de influencia del proyecto de explotación petrolera del consorcio Colombia Energy, bloquearon vías y se movilizaron por los incumplimientos del Gobierno Nacional y la contaminación ambiental por parte de la empresa, para exigirle a la misma inversión en toda la región y por el temor a ser desplazados por el megaproyecto. Esto se da en el contexto de los atentados de las FARC-EP a la infraestructura petrolera, por lo cual también quieren que el proyecto se vaya de la región. Además, los habitantes protestan contra la Fuerza Pública que está al servicio de la seguridad de estas empresas y rechazan la ampliación de la licencia otorgada por la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla).

“

El manejo de las relaciones del movimiento campesino y el Gobierno Nacional queda en manos de las organizaciones, parece que no se puede esperar del Ejecutivo más que desgaste.

”

Y, para cerrar el año, la Orinoquía se levantó: desde el 15 de noviembre y durante buena parte del mes de diciembre, municipios de Meta y Guaviare se declararon en paro para exigir el cese de erradicaciones forzosas y fumigaciones de cultivos de uso ilícito sin programas integrales y efectivos de sustitución de cultivos.

Vale mencionar que otras protestas del año no tuvieron impacto nacional aunque se dirigieron contra el Gobierno Central y se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, particularmente, las relacionadas con motivos ambientales (en coalición con otras organizaciones civiles, fundamentalmente contra la minería, la explotación petrolera y los megaproyectos hidroeléctricos en los territorios) y de exigencia de revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Las relaciones

En primer lugar, parece que el gobierno Santos no aprendió nada del 2013, o por lo menos así queda demostrado con la continua criminalización de la protes-

ta, la judicialización de líderes y la brutal represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que por demás, se re-crudece abiertamente. Si bien se ha sentido a negociar, estas acciones refuerzan la idea del desprecio por la organización social de parte del Gobierno Nacional.

Comenzando el año, en el mes de febrero, el Gobierno parecía cambiar de tono, pues la forma en que negoció directamente con Dignidad Cafetera y no con la Federación sobre el pago de Protección al Ingreso Cafetero (PIC) parecía mostrar su reconocimiento político de las organizaciones campesinas por encima de los gremios. Sin embargo, una mirada al año completo permite concluir que esta negociación no fue más que una de las tantas estrategias apaga-incendios, que también aumentaron durante el año: la creación de la Comisión de Insumos Agrícolas y Pecuarios para definir los precios de referencia de fertilizantes, la asignación de una tarjeta de crédito agrícola, la compra de cartera morosa y, finalmente, el aumento de recursos para el sector agropecuario (Arias, 2014).

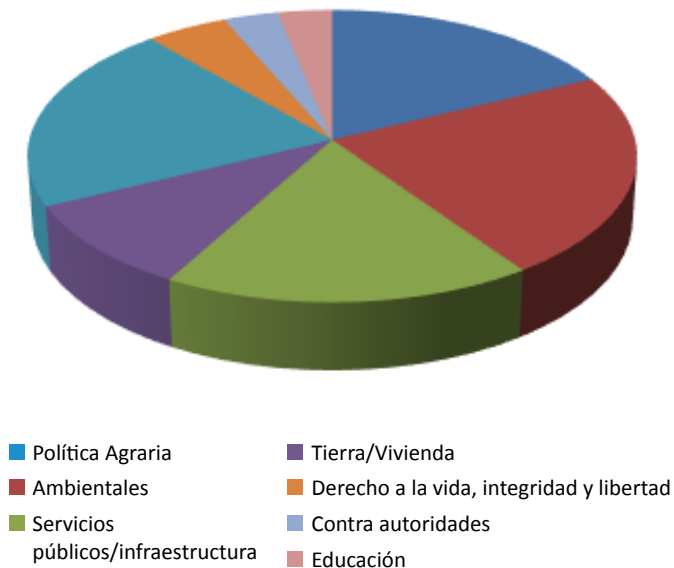
A este repertorio parece sumarse la esperada instalación de la Mesa Única

de Participación y Concertación entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria, y la oficialización del gremio de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que tendrían la tarea de tramitar las exigencias del Paro Agrario del 2013 (y las movilizaciones siguientes) y discutir la renegociación de los acuerdos comerciales; pero, en lo que restó del año, no hubo resultados concretos. Esto da pistas sobre la posible continuación de idas y venidas en negociaciones durante el año 2015. Habrá que ver en qué irán los acuerdos en el próximo mes de agosto, cuando se cumplan dos años del Paro Nacional Agrario.

Con este panorama, se puede concluir, que el manejo de las relaciones del movimiento campesino y el Gobierno Nacional queda en manos de las organizaciones, parece que no se puede esperar del Ejecutivo más que desgaste. Le corresponde entonces al movimiento social la definición de una estrategia de negociación que impida las dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos y que empiece a exigirle al Gobierno el cese de las soluciones apaga-incendios.



Algunos de los motivos de la movilización campesina en 2014 fueron la problemática ambiental, les siguen las relacionadas con invasiones de tierras, recuperaciones de predios y exigencias de derecho a la vivienda rural. Foto: Archivo CINEP/PPP.

Figura 1: Motivos de movilización agraria. Colombia 2014


La movilización de campesinos y pobladores de frontera urbano-rural en Colombia, durante el año 2014, tuvo como principal motivo la problemática ambiental; fundamentalmente, por la oposición a la construcción de megaproyectos en los territorios y para denunciar las afectaciones por la minería. A estas protestas les siguen las relacionadas con invasiones de tierras, recuperaciones de predios y exigencias de derecho a la vivienda rural. El tercer lugar lo ocupan la política agraria (motivo principal de los paros nacionales) y las protestas a lo largo y ancho del país por reparación o construcción de vías y acceso a servicios públicos de agua y energía. Los incumplimientos de acuerdos previos por parte del Gobierno Nacional y de las empresas que se han instalado en las regiones ocupan el cuarto lugar. Es importante señalar que aunque presentan un menor porcentaje, las comunidades rurales siguen protestando para garantizar su derecho a la vida, la integridad y la libertad. Y, en el último renglón, encontramos la exigencia de maestros para las escuelas rurales y el malestar frente a la gestión de autoridades locales. **C**

Fuente: Base de datos de Luchas Sociales en Colombia – CINEP/Programa por la Paz, 2015.

***Ana María Restrepo Rodríguez**

Investigadora CINEP/Programa por la Paz. Equipo Movilización, Tierra y Territorio. Proyecto Movimientos sociales.

Referencias

1. Para un análisis más detallado: Informe Especial Cinep *Luchas Sociales en Colombia 2013*.
2. En este análisis sólo se incluirán aquellas movilizaciones que dieron cuenta de la relación del campesinado con el Gobierno Central, es decir, en las que el Ejecutivo Nacional fue identificado claramente como el adversario. (Entendemos adversario como el actor que participantes y convocantes identifican como la causa o el posible ejecutor de soluciones para los problemas que los afectan).

Bibliografía

- Arias, F. (22 de abril de 2014). Recursos por \$5,2 billones no atajan paro agrario del lunes. *El Colombiano*. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/recursos_por_-52_billones_no_atajan_paro_agrario_del_lunes-EXEC_291731
- CINEP/Programa por la Paz. (2014). *Informe Especial. Luchas sociales en Colombia 2013* (Informe Especial CINEP/PPP Abril 2014). Recuperado de http://issuu.com/cinepppp/docs/informe_especial_luchas_sociales_en

El Sistema de Información General

Es la estructuración de un conjunto de bases de datos del CINEP/Programa por la Paz que, sustentada en el acumulado investigativo de la institución, analiza, clasifica y hace seguimiento a los conflictos sociales, políticos, paz, luchas sociales, derechos humanos y violencia política en Colombia.



Apostamos por la vida.
Trabajamos por una sociedad
justa, sostenible y en paz.

www.cinep.org.co